# EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hasta el año 2012, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de sus Administraciones Zonales realizaba como parte de sus funciones el registro y aprobación de planos correspondientes a la habilitación de suelo y edificación; sin embargo, las referidas dependencias, no contaban con la capacidad operativa necesaria para cumplir estas funciones, pues ello implicaba trámites burocráticos que tomaban una gran cantidad de tiempo, pudiendo demorar varios meses hasta su conclusión.

La verificación de los planos y de cumplimiento de normas administrativas se realizan de forma previa a la emisión de las Licencias Metropolitanas Urbanísticas correspondientes a la habilitación del suelo y edificaciones como un requisito fundamental y habilitante cuyo fin es proporcionar a las Administraciones Zonales un insumo que indique que la persona interesada cumple con todas las exigencias necesarias para el otorgamiento del permiso.

El artículo 2068 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito (en adelante Código Municipal) establece que *“para la gestión administrativa, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito podrá contar con el auxilio de entidades colaboradoras para la comprobación del cumplimiento de normas administrativas y Reglas Técnicas correspondientes”*; en virtud de esta atribución, el artículo 2069 ibídem prevé que estas entidades podrán intervenir bajo las modalidades de a) contrato administrativo; y b) sistema de acreditación y libre concurrencia.

Frente a las limitaciones de la capacidad operativa de la administraciones zonales, a partir del año 2012, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en alianza público-privada, ha acreditado a empresas privadas bajo la figura de Entidades Colaboradoras a fin de realizar una serie de obligaciones conforme lo establece el artículo 2048 del Código Municipal, siendo su literal b) “*el expedir los informes o certificados de conformidad y los informes de comprobación periódica de los plazos establecidos y con el contenido, formato y soporte que determine el Municipio de Quito*”.

El procedimiento ordinario para obtener las Licencias Metropolitanas Urbanísticas de habilitación de suelo o edificación, establece que, de forma previa, se debe contar con el Certificado de Conformidad del Proyecto Técnico. Este certificado es un informe favorable extendido por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito o, en su caso por las Entidades Colaboradoras, según corresponda, en el que se verifica el cumplimiento de la normativa metropolitana y nacional vigentes, incluyendo las normas administrativas y Reglas Técnicas previstas para cada caso (subdivisiones, reestructuraciones parcelarias, urbanizaciones y edificaciones)[[1]](#footnote-1).

Con los antecedentes del proceso de certificación, con la entrada en vigencia de la Ordenanza Metropolitana No. 308 de 30 de marzo de 2010, desde ese año a partir del año 2012, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, habilitó la posibilidad de contar con el auxilio de la empresa privada a quienes en la Ordenanza Metropolitana No. 308 se les denominó “Entidades Colaboradoras”[[2]](#footnote-2).

En el mismo texto la Agencia Metropolitana de Control, asumió la competencia para controlar y auditar a dichas entidades. En virtud de ello, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito procedió a acreditar como Entidad Colaboradora del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para la emisión de Certificados de Conformidad a la empresa del Colegio de Arquitectos del Ecuador, que una vez acreditada se denominó ECP-CAE-P Entidad Colaboradora del Colegio de Arquitectos del Ecuador, la que inició sus funciones en el año 2013.[[3]](#footnote-3)

Posteriormente, en el año 2016, la Agencia Metropolitana de Control acreditó y habilitó a la empresa Desintecsa S.A como Entidad Colaboradora del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para la emisión de Certificados de Conformidad.

A partir de la acreditación a las citadas entidades privadas, el trámite para el registro y aprobación de planos de proyectos técnicos, se fijó a un máximo de 17 días, contrastando con el tiempo de certificación de la Administraciones Zonales, que demoraba cuando los aprobaban las Administraciones Zonales.

Actualmente la Agencia Metropolitana de Control cuenta con dos entidades acreditadas: ECP-CAE-P- Colegio de Arquitectos del Ecuador y DESINTECSA S.A, las cuales hasta el año 2019, habían receptado más de 63.000 trámites y de los cuales se habían emitido alrededor de 35. 000 certificados de conformidad.[[4]](#footnote-4)

Para el año 2022, la Entidad Colaboradora ECP-CAE-P- Colegio de Arquitectos del Ecuador ha ingresado 71.728 trámites y no se dispone de datos precisos respecto al ingreso monetario derivado de este tipo de procedimientos.

Cabe mencionar que las Entidades Colaboradoras son instituciones privadas que cobran una tarifa por cada trámite efectuado por las personas que requieren este servicio. La Agencia Metropolitana de Control, a través de la Resolución RES-AMC-2016-0002 de 27 de enero de 2016 estableció el monto de la tarifa por certificación.

La tarifa por el servicio que prestan las entidades colaboradoras se cobra conforme el siguiente detalle:

1. Tarifa proyectos arquitectónicos: $0.97 multiplicado por el total de metros cuadrados del proyecto.
2. Tarifa proyectos de ingeniería: $0.49 multiplicado por el total de metros cuadrados del proyecto.
3. Valores complementarios a la tarifa:

3.1.- Propiedad Horizontal: 25% del valor de la tarifa.

3.2.- Subdivisiones: 70% de la remuneración básica unificada.

3.3.- Planos Modificatorios: 30% de la tarifa.

3.4.- Anteproyectos: 50% de la tarifa

De la revisión de la página web de la Entidad Colaboradora ECP-CAE-P- Colegio de Arquitectos del Ecuador se desprende el siguiente tarifario.



Tabla de cálculo extraída de la página web de Entidad Colaboradora ECP-CAE-P- Colegio de Arquitectos del Ecuador[[5]](#footnote-5)

Sin embargo, del mismo portal web, se desprende que la Entidad Colaboradora ECP-CAE-P- Colegio de Arquitectos del Ecuador cobra una tarifa adicional por costos de impresión sin que este rubro esté determinado en algún instrumento normativo emitido por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito[[6]](#footnote-6).

De la revisión de la página web de la Entidad Colaboradora DESINTECSA S.A se observa que no consta el detalle de las tarifas que cobran por la emisión de certificados de conformidad.

Existiría incertidumbre de la ciudadanía respecto a la función que desempeñan las Entidades Colaboradoras y los niveles de coordinación con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; a su vez, las Administraciones Zonales han reportado que al momento de revisar los certificados de conformidad emitidos por las Entidades Colaboradoras se han detectado posibles inconsistencias.

En el caso de la Entidad Colaboradora ECP-CAE-P- Colegio de Arquitectos del Ecuador, para el año 2022 se reportan 66 solicitudes de revisión todas ellas con inconsistencias tales como corresponden a: 19 certificaciones de Propiedad Horizontal, 33 certificaciones de subdivisión, 12 certificaciones de proyectos arquitectónicos, 1 certificación de reestructuración parcelaria y 1 certificación estructural[[7]](#footnote-7).

En el caso de la Entidad Colaboradora DESINTECSA S.A para el año 2022 se reportan 39 solicitudes de revisión todas ellas con inconsistencias tales como corresponden a: 14 certificaciones de Propiedad Horizontal, 12 certificaciones de subdivisión, 12 certificaciones de proyectos arquitectónicos y 1 certificación estructural[[8]](#footnote-8)

La Agencia Metropolitana de Control ha realizado varias auditorías conforme lo establece la normativa metropolitana. Del año 2014 al 2021 ha realizado nueve (9) auditorías a la Entidad Colaboradora ECP-CAE-P- Colegio de Arquitectos del Ecuador; del año 2017 al año 2021 ha realizado 6 auditorías a la Entidad Colaboradora DESINTECSA S.A. De estas auditorías realizadas, la Agencia Metropolitana de Control es enfática en señalar que no existe una normativa que le permita revisar de forma técnica ni detallada ni la forma en que las entidades colaboradoras emiten los certificados de conformidad, y que en las auditorías realizadas la única revisión efectuada es al cumplimiento de los requisitos bajo las cuales fueron acreditadas, más no han revisado los aspectos técnicos ni tampoco las inconsistencias que han sido reportadas por las Administraciones Zonales.

Por su parte, las Administraciones Zonales señalan que no existe una normativa que les permita hacer revisiones técnicas de fondo a los certificados de conformidad que emiten las Entidades Colaboradoras, por cuanto su revisión se limita a verificar aspectos de forma en cada uno de los certificados y de ello, envían estas inconsistencias a la Agencia Metropolitana de Control.

Es una preocupación de las Administraciones Zonales que, al no poder revisar en la integralidad los certificados de conformidad emitidos que emiten las Entidades Colaboradoras, están impedidos de revisar si existen errores de fondo de los certificados y por cuanto, al momento de emitir las Licencias Metropolitanas Urbanísticas, limitan su accionar a indicar la presencia inconsistencias a la Agencia Metropolitana de Control, y con ello, su accionar culmina.

Adicional a los datos referidos, cabe señalar que el rol que cumplen la Entidades Colaboradoras, derivaría en un papel de juez y parte; considerando que por un lado, constituyen las entidades legalmente acreditadas por el Municipio de Distrito Metropolitano de Quito, para la revisión de diferentes planos que permiten la obtención de las licencias urbanísticas; pero además, por su naturaleza, constituyen entidades que ofertan servicios de arquitectura e ingeniería a la comunidad; lo que evidencia una duplicidad de funciones respecto a un mismo ámbito de acción.

Así también se han generado limitaciones en cuanto la revisión que realizan las Entidades Colaboradoras; puesto que su análisis se centra en la documentación que proporcionan las personas que requieren el servicio y sus profesionales, más no realizan una inspección de campo para verificar in situ si en efecto la documentación coincide con lo presentado por las personas administradas.

Desde el 2013 estas dos (2) entidades ECP-CAE- Colegio de Arquitectos y DESINTECSA no han sido controladas ni auditadas de debida forma. Tampoco han sido sancionadas, desacreditadas ni deshabilitadas, por cuanto han certificado y siguen certificando todos los procesos de habilitación de suelo y edificación desde esa fecha hasta la actualidad.

La centralización de la tramitología para la obtención de la certificación de las construcciones ha desencadenado en inconsistencias que podrían derivar en el incumplimiento de las normas técnicas y legales y que, a pesar de tener un procedimiento sancionatorio en firmes con medida provisional- cautelar (sello de suspensión de obra), las Entidades Colaboradoras siguen certificando estos proyectos.

El numeral 6 del artículo 304 de la Constitución del Ecuador establece que el Estado tiene como objetivo dentro de las políticas comerciales, evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas. En conexidad con el artículo 334 de la Carta Fundamental dictamina que corresponde al Estado promover el acceso equitativo a los factores de producción, evitando la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, la redistribución y supresión de privilegios o desigualdades en el acceso a ellos y anclado al artículo 336 de la misma norma suprema impone al Estado el deber de impulsar y velar por un comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, promoviendo la reducción de las distorsiones de la intermediación y promoción de su sustentabilidad, asegurando de esta manera la transparencia y eficiencia en los mercados, mediante el fomento de la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá́ mediante Ley.

Adicional a ello, es importante mencionar que cuando las instituciones públicas realizan contrataciones, convenios o cualquier tipo de alianza público- privada en la que estén involucrados fondos públicos estos procesos deben ser de conocimiento público. En virtud de la transparencia y en ejercicio del derecho al acceso a la información pública y a la publicidad comprende: *“1) Buscar, recibir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior y 2) Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá́ reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información”.[[9]](#footnote-9)*

En este razonamiento, el Código Orgánico Administrativo, en virtud del principio de eficiencia establece que las actuaciones administrativas aplicarán las acciones que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas, prohibiendo con ello, las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de requisitos puramente formales.[[10]](#footnote-10)

Para el jurista y sociólogo Erick Olin Wright, un parámetro importante para poder identificar a quién realmente benefician las políticas públicas es a través de la aplicación del método de la brújula, para ello establece tres parámetros de medición: 1) el Estado, las empresas o el pueblo[[11]](#footnote-11). En el caso bajo análisis se podría afirmar que la ejecución de una parte de la política pública orientada a garantizar el derecho a ciudad, el acceso a los servicios públicos de calidad con el ello el acceso a la vivienda, la propiedad, el crecimiento ordenado y planificado de la ciudad se encuentra en manos de dos empresas privadas que actúan con un doble rol en los procesos de revisión de planos. Debido a ello, el Colegio de Arquitectos es un organismo al que se afilian la mayoría de profesionales que egresan de las carreras de arquitectura, concentrando con ello en la empresa la capacidad de certificar sin un adecuado control.

Ante este escenario, el numeral 2 del artículo 85 de la Constitución del Ecuador advierte que cuando las políticas públicas o prestación de servicios vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales las mismas deberán reformularse o se deberán adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto, por cuanto se detecta que es necesaria y urgente una reforma al Código Municipal que permita recuperar la atribución de la emisión de Certificados de Conformidad, y con ello, recuperar los ingresos económicos que se generan por la emisión de certificados de conformidad.

Si bien es cierto, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, cedió esta competencia en función de la limitada capacidad que disponía para atender la demanda ciudadana; en la actualidad se presentan nuevos escenarios de colaboración con otros actores sociales; a nivel internacional se potencian a diario convenios que permiten una intervención de la academia en la gestión de los temas públicos; dando lugar a beneficios mutuos orientados al fin común de servir a la sociedad.

En tal sentido, el involucramiento de instituciones educativas de nivel superior que contengan dentro de su oferta académica carreras profesionales de arquitectura, ingeniería y otras afines a cada ámbito, permite generar un espacio de interacción con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, estableciendo la posibilidad de desarrollar acciones en conjunto que brinden un servicio a la comunidad en forma oportuna, eficiente y efectiva, permitiendo además, que quienes integran la academia aporten con sus conocimientos dentro de la gestión municipal y se contribuya de manera directa a la profesionalización de la comunidad educativa.

**EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO**

Visto el Informe No. XX de xx de xx de 2022, expedido por la Comisión de Uso de Suelo.

**CONSIDERANDO:**

**Que,** los numerales 5 y 6 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador (“la Constitución”) establecen como deberes primordiales del Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir; y, promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomía y descentralización;

**Que**, el artículo 30 de la Constitución, reconoce el derecho que tienen todas las personas a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica;

**Que,** el artículo 31 de la Constitución dispone que las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural, y que el ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía;

**Que,** el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución reconoce y garantiza a las personas el derecho a una vida digna que asegure la vivienda y otros servicios sociales necesarios;

**Que,** el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución recoge el derecho de las personas a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así́ como, a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características;

**Que,** el numeral 26 del artículo 66 y el artículo 321 de la Constitución garantizan a las personas el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental;

**Que,** la Constitución en su artículo 82 garantiza la seguridad jurídica, misma que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes;

**Que,** el numeral 2 del artículo 85 de la Constitución dispone que la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularan sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular. Cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá́ reformularse o se adoptaran medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto;

**Que,**  el artículo 226 de la Constitución, dispone: *“las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”*;

**Que**, el artículo 227 de la Constitución manda *"la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;*

**Que**, la profesionalización del servicio público, garantizada en el artículo 234 de la Constitución, a través de la formación y capacitación continua, requiere instrumentos simplificados y de fácil aplicación;

**Que,** el artículo 240 de la Constitución determina que los gobiernos autónomos descentralizados en el marco de sus competencias tendrán facultades legislativas en su circunscripción territorial correspondiente;

**Que,** el artículo 283 de la Constitución establece que el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.

**Que,** el segundo inciso del artículo 300 de la Constitución establece que la política tributaria estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.

**Que,** el numeral 6 del artículo 304 de la Carta Fundamental en relación a la política comercial establece que el Estado debe *“Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados.”*

**Que,** el numeral 1 del artículo 334 de la Constitución dictamina que el Estado promoverá el acceso equitativo evitando *“la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a ellos.”*

**Que,** el artículo 314 de la Constitución dispone que los servicios que brinde el Estado deben responder a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad

**Que,** el artículo 389 de la Constitución establece que es deber del Estado proteger *“a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mantenimiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad (…)”;*

**Que**, el artículo 390 de la Constitución ordena *“los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad”;*

**Que,** el artículo 87 letra a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (en adelante COOTAD), dispone que son atribuciones del Concejo Metropolitano “*a) Ejercer la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado metropolitano, mediante la expedición de ordenanzas metropolitanas, acuerdos y resoluciones”;*

**Que,** el artículo 28 del Código Orgánico Administrativo dispone que las administraciones trabajarán de manera coordinada, complementaria y prestándose auxilio mutuo, así mismo acordarán mecanismos de coordinación para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos;

**Que,** el artículo 41 del citado cuerpo legal dispone que: “*Las personas deben colaborar con la actividad de las administraciones públicas y el buen desarrollo de los procedimientos. [...] Facilitaran a las administraciones públicas informes, inspecciones y otros actos de investigación en los casos previstos por el ordenamiento jurídico. [...] Proporcionaran a las administraciones públicas actuantes, información dirigida a identificar a otras personas no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento. [...] Comparecerán ante los titulares de los órganos administrativos responsables de la tramitación de las actuaciones o los procedimientos administrativos, cuando sean requeridos. [...] Denunciaran los actos de corrupción”;*

**Que,** el artículo 3 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos establece como principios rectores de los trámites administrativos, entre otros, los siguientes: *“1. Celeridad. - Los trámites administrativos se gestionarán de la forma más eficiente y en el menor tiempo posible, sin afectar la calidad de su gestión. 2. Consolidación.- Todas las entidades reguladas por esta Ley deberán propender a reunir la mayor actividad administrativa en la menor cantidad posible de actos. Además, impulsarán la consolidación de trámites de naturaleza similar o complementaria en un solo proceso administrativo. [...] 7. Interoperabilidad: Las entidades reguladas por esta Ley deberán intercambiar información mediante el uso de medios electrónicos y automatizados, para la adecuada gestión de los trámites administrativos”;*

**Que,** el artículo 14 literal i) de la Ley de la Juventud que establece que las políticas educativas deben estar dirigidas a “*Promocionar pasantías laborales, en los sectores público y privado, enfocadas en las necesidades de desarrollo del país y la oferta de empleo”.*

**Que,** el artículo 149 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, determina que: *“Las instituciones del sector público podrán celebrar convenios o contratos de pasantías con estudiantes de institutos, universidades y escuelas politécnicas, reconocidas por el organismo competente en el país, conforme al artículo 59 de la LOSEP, mismos que se sustentarán en convenios previamente celebrados con las respectivas instituciones del sistema de educación superior”.*

**Que,** la Corte Constitucional del Ecuador, en su sentencia No. 2167-21-EP que resolvió la problemática del Río Monjas en el DMQ, reconoce el derecho a la ciudad como un derecho que pertenece toda la población y a todos los sujetos que la habitan, a las generaciones presentes como futuras, para ocupar, usar y producir ciudades justas y sostenibles. A su vez, indica que el alcance de este derecho se orienta al menos a: 1) la distribución espacial justa de recursos para asegurar buenas condiciones de vida de toda la población; 2) la gestión democrática de la ciudad, 3) la diversidad social, económica y cultural, y 4) la armonía con la naturaleza.

**Que,** el artículo 2068 de la Ordenanza Metropolitana No. 001 que contiene el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito (“Código Municipal”) establece que *“para la gestión administrativa, el Municipio del Distrito Metropolitano podrá contar con el auxilio de entidades colaboradoras para la comprobación del cumplimiento de normas administrativas y Reglas Técnicas correspondientes.”*

**Que,** el artículo 2069 del Código Municipal en relación a las modalidades de intervención de las Entidades Colaboradoras establece: *“las entidades colaboradoras podrán intervenir bajo las siguientes modalidades: a) Contrato administrativo; y, b) Sistema de acreditación y libre concurrencia.”*

**Que,** el artículo 2072 del Código Municipal dispone *“Le corresponde al Alcalde o a su delegado, en el caso de los órganos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, o bien al representante legal del correspondiente ente autónomo, determinar la oportunidad, mérito o conveniencia de contratar los servicios de una Entidad Colaboradora, como prestataria del servicio de comprobación o verificación del cumplimiento de normas administrativas y Reglas Técnicas dentro del específico procedimiento administrativo del que se trate, en el que se requiera tales tareas.”*

**Que,** el artículo 2072 del Código Municipal dispone *“El sistema de acreditación y libre concurrencia, como modalidad de intervención de las entidades colaboradoras, consiste en el conjunto de procedimientos por los cuales dos o más sujetos de derecho público o privado, que se ajusten a las exigencias técnicas determinadas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, son habilitados administrativamente para, en un contexto de libre concurrencia, presten servicios al administrado y emitan informes o certificados de conformidad, a petición y a costa de los mismos administrados; informes y certificados que son empleados dentro del procedimiento administrativo de competencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en justificación o prueba del cumplimiento de normas administrativas y Reglas Técnicas.”*

**Que,** el artículo 2073 del Código Municipal en relación a la gestión del sistema de acreditación de las Entidades Colaboradoras establece *“1. La acreditación de entidades colaboradoras le corresponde al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Agencia Metropolitana de Control. 2. Para la acreditación, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito podrá contar con el auxilio de personas jurídicas de Derecho privado o público, especializadas en \la materia, a través de la contratación de servicios. 3. Cuando sobre una solicitud de acreditación recaiga decisión denegatoria, la entidad solicitante podrá manifestar su disconformidad ante el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, empleando los recursos administrativos establecidos en el ordenamiento jurídico metropolitano. 4. Los requisitos de acreditación serán los previstos en este Título y en las Reglas Técnicas que sean expedidas vía Resolución del Concejo Metropolitano, atendiendo las circunstancias de la gestión.”*

**Que,** el objetivo 7 del Plan Nacional de Desarrollo, *"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", determina como una de sus políticas mejorar la calidad de las regulaciones y simplificación de trámites para aumentar su efectividad en el bienestar económico, político social y cultural”;*

**Que,** con el fin de cumplir con la obligación que tiene la Administración Publica de operar de forma eficiente, de facilitar la vida a las y los ciudadanos, de mejorar la competitividad sistémica del país, y de garantizar el acceso efectivo a servicios públicos, es necesario contar con una norma que establezca disposiciones que permitan garantizar la transparencia y eficiencia de los trámites administrativos en la obtención de certificados de conformidad para que estos sean obtenidos de una forma rápida y simplificada garantizando el derecho al acceso universal a la vivienda digna.

En ejercicio de las atribuciones contenidas en el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador, en los artículos 7 y 87 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito.

**EXPIDE LA SIGUIENTE,**

**ORDENANZA METROPOLITANA SUSTITUTIVA AL TÍTULO VIII, DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.**

**Artículo Único. -** Sustitúyase el Título VIII de las Entidades Colaboradoras del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito por el siguiente texto:

# TÍTULO VIII: DE LAS ENTIDADES ACADÉMICAS COLABORADORAS

## CAPÍTULO I: ÁMBITO, FINALIDAD Y PRINCIPIOS

**Artículo (…1).- Ámbito. –** La presente normativa promueve y regula la vinculación de entidades académicas del Distrito Metropolitano de Quito a actividades de participación ciudadana y transferencia de conocimientos y experiencias, en las materias de competencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

**Artículo (…2).- Finalidad. -** A través de esta normativa se impulsará la vinculación de entidades académicas especializadas en determinadas materias de competencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de colaborar con esta entidad a través de actividades de observación, evaluación y monitoreo a su gestión administrativa, lo cual podrá ser habilitado académicamente como práctica estudiantil pre-profesional u otras que sean de carácter obligatorio dentro de la formación académica.

**Artículo (…3). - Principios. –** Para la aplicación de esta normativa, se observarán los principios establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, por cuanto serán los siguientes:

1. **Calidad. -** La administración pública local, así como las Entidades Colaboradoras deberán satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las personas, con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos públicos.
2. **Coordinación. -** La administración pública local, así como las Entidades Colaboradoras desarrollarán sus competencias de forma racional y ordenada, evitarán las duplicidades y las omisiones.
3. **Consolidación. -** Todas las entidades reguladas por esta Ley deberán propender a reunir la mayor actividad administrativa en la menor cantidad posible de actos. Además, impulsarán la consolidación de trámites de naturaleza similar o complementaria en un solo proceso administrativo.
4. **Eficacia. -** Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias.
5. **Eficiencia. -** Las actuaciones administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. Se prohíben las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de requisitos puramente formales.
6. **Equidad Interterritorial. -** La organización territorial del Estado y la asignación de competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos dentro de su circunscripción territorial.
7. **Juridicidad. -** La actuación administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios, a la jurisprudencia aplicable y al presente Código
8. **Lealtad institucional:** Las administraciones públicas respetarán, entre sí, el ejercicio legítimo de las competencias y ponderarán los intereses públicos implicados.
9. **Responsabilidad:** La municipalidad responderá por los daños como consecuencia de la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones u omisiones de sus servidores públicos o los sujetos de derecho privado que actúan en ejercicio de una potestad pública por delegación del Estado y sus dependientes, controlados o contratistas. l Estado hará efectiva la responsabilidad de la o el servidor público por actos u omisiones dolosos o culposos. No hay servidor público exento de responsabilidad.
10. **Oportunidad:** La actuación administrativa debe respetar la celeridad que el caso amerite o en atención a las circunstancias de cada caso en particular, a fin de satisfacer de forma eficiente y eficaz las necesidades y el interés público en general.
11. **Transparencia y publicidad:** Las personas accederán a la información pública y de interés general, a los registros, expedientes y archivos administrativos, en la forma prevista en este Código y la ley.
12. **Participación Ciudadana:** Se garantizará la participación de los estudiantes en la gestión de aspectos específicos de la gestión municipal, sin perjuicio de que se opte por otros métodos de participación previstos en la normativa correspondiente.
13. **Seguridad Jurídica. -** La actuación administrativa municipal, así como de las Entidades Colaboradoras actuarán bajo los criterios de certeza y previsibilidad. Los derechos de las personas no se afectarán por errores u omisiones de los servidores públicos en los procedimientos administrativos, salvo que el error u omisión haya sido inducido por culpa grave o dolo de la persona interesada.
14. **Subsidiaridad. –** Las administraciones con nivel territorial superior intervendrán cuando los objetivos de la actuación pública pretendida no puedan ser alcanzados en los niveles inferiores, con arreglo a los principios de eficacia, eficiencia, efectividad y economía.

Cuando ejerzan competencias sobre la misma materia, actuará la administración pública más cercana al domicilio de las personas.

**Artículo (…4).- De la transferencia de conocimientos.-** Las universidades y escuelas politécnicas debidamente acreditadas por la entidad encargada del Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, podrán proporcionar a la municipalidad aportes teóricos y experimentales actualizados basados en investigaciones o prácticas en el marco de los temas de competencia de esta institución, como son, entre otros, ordenamiento territorial, planificación de suelo, gestión de riesgos, estándares urbanísticos y de construcción, control y gestión y ambiental, entre otros, que permitan el mejoramiento de la gestión administrativa del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

## CAPÍTULO IIDE LOS CENTROS ACADÉMICOS Y SUS MODALIDADES DE INTERVENCIÓN

**Artículo (…5).- De la Acreditación.-** Para intervenir como Entidades Académicas Colaboradoras del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (“EAC del MDMQ”), los centros académicos deberán aplicar al proceso de acreditación que se realizará conforme a lo prescrito en el Reglamento a la presente normativa.

Artículo **(…6)**.- **De los sujetos de acreditación**.- Podrán acogerse al proceso de acreditación las universidades, escuelas politécnicas y centros equivalentes, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito que se encuentren debidamente registrados en el Consejo de Educación Superior (CES) o aquel que determine la entidad nacional competente y que impartan estudios vinculados a las actividades de aplicación de las competencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en las áreas de planificación urbana, gestión ambiental y de la salud.

**Artículo (…7).- De los Requisitos:** Los centros académicos que deseen acreditarse como EAC del MDMQ, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Tener una facultad, escuela o unidad especializada en áreas académicas cuyo ejercicio profesional se relacione con la planificación, evaluación o gestión de actividades conducentes a ejecutar o aplicar competencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en los campos de la planificación urbana; ordenamiento territorial, regularización de asentamientos humanos, gestión de la obra pública; gestión ambiental, de áreas naturales y de la minería no-metálica; y/o, gestión de la salud.
2. Que el pensum de estudios en los campos señalados en el numeral precedente, haya sido debidamente aprobado por el CES y cualquier otra entidad pública que sea del caso;
3. Que la facultad, escuela o unidad especializada del centro académico establezca en sus instrumentos regulatorios, la opción de que los estudiantes del último año de la carrera o especialización correspondiente puedan, realizar actividades de práctica pre-profesional en el MDMQ o en el sector público en general;
4. Que la facultad, escuela o unidad especializada correspondiente tenga al menos cinco años de actividades regulares;
5. Autorización del Concejo Superior o instancia directiva máxima de la facultad, escuela o unidad especializada, al decano, director o autoridad equivalente, a realizar el proceso de acreditación correspondiente y, de ser este aprobado, a suscribir un convenio con el MDMQ para realizar las actividades de colaboración previstas en esta normativa.

**Artículo (…8).- De las modalidades de Colaboración**: Los centros académicos descritos en la presente normativa podrán acreditarse para colaborar con el MDMQ de las siguientes maneras:

1. Observancia estudiantil;
2. Seguimiento de procesos administrativos; y,
3. Acompañamiento a organizaciones y personas en acciones de participación ciudadana.

Observando los derechos y garantías de las personas, ninguna de estas modalidades de colaboración implicará dependencia laboral alguna, ni se considerará un trabajo remunerable, sin que las entidades académicas correspondientes puedan obligar a sus estudiantes a realizarlos.

Una vez acreditado un centro académico, la iniciativa a realizar las actividades amparadas en la presente normativa corresponderá al estudiante, a través de su respectiva institución de estudios.

**Artículo (…9).- De la Observación Estudiantil.-** Serán actividades de campo en las que los estudiantes puedan acompañar a funcionarios públicos municipales a realizar inspecciones o verificaciones a obras, actividades reguladas, situaciones de atención ciudadana, alertas de emergencia o riesgo, entre otras.

**Artículo (…10).- Del Acompañamiento a organizaciones en acciones de participación ciudadana.**- En estas actividades de colaboración, los estudiantes apoyarán a organizaciones de hecho o de derecho que se encuentren interactuando con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el contexto de cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana previstos en el Código Municipal. Este apoyo tendrá la finalidad de orientar técnicamente a sus planteamientos, acompañarlos en mesas de trabajo, audiencias u otras diligencias ante funcionarios o autoridades municipales; o, configurar requisitos, generar informes y cumplir formalidades que esas personas u organizaciones requieran para la aprobación de trámites que tengan en la entidad municipal.

**Artículo (…11).- Del Seguimiento de procesos**; En estos casos, bajo acuerdo expreso con las autoridades estudiantiles y/o con los tutores académicos, se asignará a los estudiantes interesados, procesos específicos bajo trámite en las dependencias municipales participantes, con el fin de verificar que en los mismos se hayan cumplido los requisitos, el debido proceso y otras formalidades y sustancialidades necesarias para su aprobación en el contexto normativo, administrativo y técnico establecido en el MDMQ.

**Artículo (…12).- De la selección de estudiantes para las modalidades de colaboración.-** Cada dependencia municipal rectora en el ámbito de competencia correspondiente, establecerá los requisitos académicos y de aptitud que los estudiantes deberán cumplir para cada modalidad de colaboración.

**CAPÍTULO III**

**DEL REQUERIMIENTO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA**

**Artículo (…13).- Del Pedido de Colaboración**.- Las dependencias municipales en las áreas de planificación urbana, gestión ambiental, de la salud, entre otras, podrán incluir en su planificación anual la vinculación de entidades académicas del DMQ a actividades de colaboración institucional en las modalidades previstas en este Título, a través de sus estudiantes en áreas de especialización.

**Artículo (…14).- De la planificación interna.-** Cada dependencia municipal que requiera de colaboración académica deberá realizar una planificación operativa en la que se determine el número de estudiantes que se puede recibir como colaborantes en cada modalidad, las actividades que deberán realizar, estableciendo los flujogramas, instructivos y guías que fueren del caso. Asimismo, se preverá el espacio físico correspondiente en los cuales los estudiantes deban realizar sus actividades y el horario correspondiente.

En casos debidamente justificados la dependencia preverá un fondo para gastos de movilización, compensación por carga administrativa o complejidad técnica, para asignar a los estudiantes seleccionados para realizar las actividades de colaboración.

**Artículo (…15).- De la Convocatoria para recibir peticiones de colaboración.-** Una vez aprobada la planificación de la entidad correspondiente, se realizará una convocatoria a los centros académicos acreditados del Distrito Metropolitano de Quito que hayan suscrito el convenio correspondiente con la municipalidad, señalando las áreas de especialización y el número de estudiantes que se podrían aceptar bajo cada modalidad prevista.

**CAPÍTULO IV**

**DEL PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN Y VINCULACIÓN**

**Artículo (…16).- De la petición de acreditación,-** Las entidades académicas interesadas realizarán su petición de acreditación ante la Administración General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, adjuntando los requisitos correspondientes. En la petición se indicará el área de gestión municipal en la que desean intervenir y las modalidades de colaboración, describiendo la unidad académica desde la cual se realizaría la actividad de colaboración.

Si una vez revisada la petición, esta cumple con los requisitos, la Administración General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito informará de inmediato a la dependencia elegida para realizar la colaboración, a fin de que prepare los términos técnicos y logísticos bajos los cuales se realizará la misma. Definidos estos términos se remitirá la documentación a Procuraduría Metropolitana a fin de que prepare el convenio interinstitucional correspondiente.

Una vez suscrito el convenio, este será válido para actividades de colaboración futuras, salvo que supervinieran cambios institucionales en las partes, que requirieran la suscripción de un nuevo convenio.

**Artículo (…17). - De la actualización o suspensión de la acreditación:** La acreditación de los centros académicos será permanente, mientras estos mantengan su condición de instituciones de educación superior; solo en caso de que existieran cambios de pensum, fusión o cierre de unidades académicas, deberá actualizarse la documentación pertinente o suspenderse la acreditación, según el caso.

**Artículo (…18). - Del Convenio de Colaboración. -** Las entidades académicas previstas en este Título, que cumpliendo con los requisitos correspondientes hayan sido aceptadas como Entidades Académicas Colaboradoras deberán suscribir un convenio con el MDMQ,

En el Convenio de Colaboración se establecerán las responsabilidades conjuntas por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la entidad académica correspondiente, que permitan alcanzar los intereses institucionales de gestión administrativa y de práctica y participación estudiantil, respectivamente.

**Artículo (…19).- Convenio Interinstitucional. –** Se entiende por convenio interinstitucional a todo pacto, alianza o cualquier actividad que establezca responsabilidades conjuntas por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y otras entidades públicas u organismos internacionales, organizaciones sociales y demás entidades o entes de naturaleza pública o privada sin fines de lucro, tanto nacionales como internacionales, siempre que involucren obligaciones factibles y reciprocas emanadas de las competencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el cumplimiento de su fin institucional y gestión administrativa.

Con esta finalidad los convenios interinstitucionales se sustentarán en la comprobación del cumplimiento de normas administrativas y reglas técnicas correspondientes a través de la emisión de la emisión de certificados de conformidad de los proyectos técnicos, y que se traduzcan en la suscripción de convenios previstos en el ordenamiento jurídico.

**Artículo (…20).- Convenio Marco. –** Es el instrumento en el que se recogen las obligaciones y derechos generales en el que se sustentan otros instrumentos de carácter más concreto.

**Artículo (…21).- Contenido específico de los convenios.**- Además de los detalles convencionales y cláusulas que surjan del objeto, naturaleza jurídica o necesidad institucional, los convenios deberán determinar al menos, los siguientes elementos:

1. Identificación de las partes.
2. Responsabilidad, compromisos u obligaciones de las partes.
3. Supervisión académica y administrativa;
4. Duración de la colaboración para los estudiantes seleccionados, indicando períodos y horarios;
5. Mecanismo conjunto de selección de los estudiantes colaborantes;
6. Régimen disciplinario ante inobservancias de los estudiantes;
7. Estímulos académicos y profesionales;

Estos elementos del convenio deberán ser acordados entre el centro académico y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, atendiendo a calendarios estudiantiles, programación académica, así como de las necesidades de la dependencia administrativa que receptará la colaboración.

Una vez suscrito un convenio, el centro académico correspondiente quedará habilitado para seleccionar estudiantes para realizar actividades de colaboración en cada período anual o semestral de estudios, sin necesidad de suscribir nuevos convenios.

**Artículo (…22).- De la suscripción del convenio.-** La suscripción de los convenios de colaboración académica se celebrarán a través del Alcalde, como máxima autoridad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, quien podrá delegar esta atribución a las máximas autoridades de las dependencias municipales con autonomía administrativa; o gerentes generales en caso de las empresas públicas metropolitanas.

**Artículo (…23).- Ejecución, administración y seguimiento.-** En cada convenio obligatoriamente la máxima autoridad de la entidad municipal requirente designará a la persona responsable de la administración, ejecución, seguimiento y control, quien gestionará verificará el cumplimiento de las obligaciones de las partes.

Es deber del Administrador del Convenio, emitir de forma periódica, así́ como al final de la vigencia del convenio o en cualquier momento en que se requiera un reporte en el que se especifique de forma detallada las actividades ejecutadas, el cumplimiento o no de las obligaciones por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y de su contraparte, así como los resultados alcanzados.

**CAPÍTULO V**

**DEL MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS**

**Artículo (…24).- Seguimiento y evaluación.-** El registro, seguimiento y evaluación general de los acuerdos o compromisos previstos en el convenio de colaboración académica estarán a cargo de la Secretaría de Planificación o la Dirección de Planificación de la entidad municipal requirente. Para el efecto de forma periódica realizará un reporte en el que se señale si se están cumpliendo los objetivos del convenio, los problemas detectados y las formas de solución sugeridas; con este propósito, se realizarán acciones de coordinación con las Direcciones o Unidades técnicas directamente responsables de la ejecución de la actividad colaborativa.

Adicionalmente, el desempeño de cada estudiante que participe en la actividad de colaboración, deberá ser registrado periódicamente y evaluado al final de la práctica. Esta evaluación será remitida al centro académico, a fin de que se le incorpore en el récord estudiantil correspondiente.

### CAPÍTULO VIDE LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS DE COLABORACIÓN A LAS ENTIDADES ACADÉMICAS

**Artículo (…25).- Del requerimiento de estudiantes para actividades de Colaboración.**- La entidad municipal correspondiente requerirá al inicio de su año fiscal el número de colaboradores que su planificación haya determinado como necesario para lograr el cumplimiento de sus responsabilidades administrativas. Este requerimiento será puesto en conocimiento de los centros académicos acreditados, los que propondrán a sus estudiantes habilitados para este tipo de prácticas. Si el número de estudiantes propuestos supera el número que el ente municipal puede receptar, la institución académica, los seleccionará con base a sus calificaciones o intereses profesionales, o mediante un sorteo en el que participen los estudiantes propuestos por todos los centros académicos.

**Artículo (...26).- De la verificación de normas administrativas y reglas técnicas.-** Las Entidades Académicas Colaboradoras instruirán a los estudiantes seleccionados para las prácticas, la verificación de las normas administrativas y reglas técnicas conforme lo establecido por la normativa metropolitana.

### CAPÍTULO VII

### DE LA VERIFICACIÓN DE NORMAS ADMINISTRATIVAS Y REGLAS TÉCNICAS EN LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DEL PROYECTO TÉCNICO PREVIO LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS METROPOLITANAS URBANÍSTICAS

**Artículo (…27).- De la revisión de normas administrativas y reglas técnicas en la certificación del proyecto técnico.-** La Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, a través de las Administraciones Zonales, será la encargada de la revisión de normas administrativas y reglas técnicas en la certificación de los distintos tipos de proyectos técnicos contemplado en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, siendo estos los denominados proyectos arquitectónicos, estructurales, proyectos respecto a la propiedad horizontal, subdivisiones, reestructuraciones parcelarias, proyectos modificatorios, ampliatorios y de ecoeficiencia.

**Artículo (…28).- De los requisitos específicos de las universidades que realizarán la verificación del cumplimiento de normas administrativas y reglas técnicas en la emisión de certificados de conformidad del proyecto técnico.-** Las universidades y escuelas politécnicas públicas y privadas, nacionales e internacionales que requieran obtener la acreditación para desarrollar actividades de colaboración con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, deberán cumplir con los siguientes requisitos específicos:

1. Disponer de la solvencia técnica, experiencia en estudios, diseños o proyectos necesarios para la realización de las actividades para las que solicita su acreditación. Estudios, diseños o proyectos. Estos componentes serán:

a. Los medios materiales necesarios, así́ como el personal multidisciplinario especializado en las carreras de Arquitectura o Ingeniería Civil. Dicha competencia supone la existencia, la idoneidad, la suficiencia, el mantenimiento y la actualización de las calificaciones, los conocimientos técnicos, las habilidades personales y para desarrollar las funciones y las tareas de certificación que le corresponden.

El personal de la entidad colaboradora deberá́ realizar y superar los cursos de formación complementarios teórico-prácticos que determine el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito;

b. Una estructura organizativa y de funcionamiento que garantice su competencia para llevar a cabo las funciones objeto de su actividad según los criterios y estándares de calidad establecidos en esta normativa y en las reglas técnicas. Asimismo, debe contar con un estatuto interno y un manual de funciones que detalle las actividades que realiza cada uno de los estudiantes o pasantes que pertenecen a la universidad que interviene en calidad de Entidad Colaboradora.

2. Disponer de autonomía e independencia, que permita asegurar su imparcialidad y establecer procedimientos que garanticen una actuación objetiva.

Para la realización de sus actividades dentro del ámbito de sus competencias descritas en el presente título, el personal de la entidad colaboradora deberá ser independiente de las partes interesadas. Se consideran incompatibles las actividades que puedan entrar en conflicto de intereses con su independencia, así como con la integridad respecto de las actividades de certificación y comprobación.

3. Contar con la capacidad para realizar verificaciones in situ, en función de los requerimientos de la actividad colaborativa.

4. Disponer de un sistema para el tratamiento de las reclamaciones que presenten sus clientes u otras partes acerca de sus actividades de certificación y comprobación, implementado en coordinación con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

5. Disponer de la capacidad técnica y de personal para poder realizar visitas a campo a fin de comprobar en sitio la información ingresada por las personas interesadas.

6. Disponer de un sistema informático que permita enlazar, vincularse y contar con los accesos guardando armonía y compatibilidad con los sistemas informáticos de las distintas instituciones del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Este sistema informático debe contar previamente con un informe de “Estudio de Desagregación Tecnológica”, emitido por la máxima autoridad de la Dirección Metropolitana de Informática, Dirección Metropolitana de Catastros y Administraciones Zonales que permita verificar la compatibilidad con los sistemas informáticos.

### CAPÍTULO VIII

### DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

**Artículo (…29).- Del régimen disciplinario.-** las entidades académicas garantizarán la calidad de la colaboración que prestan las y los estudiantes en función de las actividades previstas en los convenios suscritos con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para lo cual realizarán procesos de acompañamiento y seguimiento permanentes, mediante la designación de tutores nombrados por la institución académica en coordinación con los funcionarios designados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

**Artículo (…30).- De la observancia a la normativa municipal y las regulaciones académicas.-** Los estudiantes admitidos como colaboradores dentro del régimen previsto en el presente Título, deberán realizar las actividades de colaboración respetando la normativa municipal aplicable al ámbito en el cual se desempeñen, así como las regulaciones disciplinarias de sus instituciones académicas. Para el efecto deberán observar las disposiciones administrativas regulares previstas para el funcionamiento del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, así como guardar reserva respecto de los procesos técnicos administrativos puestos a su revisión.

**Artículo (…31).- De las infracciones y sanciones.-** Las entidades académicas colaboradoras aplicarán el régimen de infracciones y sanciones previstas en el sistema disciplinario de cada institución; sin perjuicio de ello, de común acuerdo el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en coordinación con la entidades académicas colaboradoras definirán un reglamento disciplinario complementario en cada ámbito de acción estableciendo faltas leves, graves y muy graves.

**DISPOSICIONES GENERALES**

**PRIMERA.-** Las dependencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito coordinarán con la Secretaría de Planificación para la definición de los ámbitos administrativos sujetos a colaboración. En este contexto, se establecerán los protocolos, procedimientos y flujogramas de las actividades administrativas que serán sujetas a colaboración por parte de las entidades académicas.

**SEGUNDA.-** El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en coordinación con las entidades académicas colaboradoras, generarán procesos de inducción, capacitación y formación que serán impartidos en las entidades académicas o en las instalaciones municipales disponibles.

**DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

**PRIMERA.-** El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, realizará una plan de transición de la gestión de las Entidades Colaboradoras que han venido funcionando hasta la presente, hacia las nuevas Entidades Académicas de Colaboración: Este proceso se realizará de manera progresiva en función de las acreditaciones y convenios de colaboración académica suscritos, así como de los trámites bajo atención de las actuales entidades colaboradoras.

**SEGUNDA.-** La Secretaría de Planificación en el término de 90 días presentará el modelo de gestión bajo el cual las universidades y escuelas politécnicas intervendrán como Entidades Académicas Colaboradoras.

**TERCERA.-**. Las entidades colaboradoras en funcionamiento a la aprobación de la presente normativa, entregarán un informe final de la gestión realizada al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, mismo que evidenciará aspectos técnicos, administrativos y económicos.

**CUARTA.-** Las entidades colaboradoras en funcionamiento a la aprobación de la presente normativa, en el término de 90 días entregarán a la Agencia Metropolitana de Control, a la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana y a la Secretaría de Planificación toda la documentación generada en los años que han prestado sus servicios.

**DISPOSICIÓN FINAL**

**Disposición Final Única. -** Esta Ordenanza Metropolitana entrará en vigencia a partir de su sanción, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial y en la página web institucional.

1. Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, artículos 1841-1845. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ordenanza Metropolitana No. 308 de 30 de marzo de 2010, artículo 60. [↑](#footnote-ref-2)
3. Agencia Metropolitana de Control, “Informe- AMC-UEC-2022-001.”, el 19 de mayo de 2022, página 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://www.quitoinforma.gob.ec/2019/05/10/entidades-colaboradoras-agilitan-permisos-de-construccion/> [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://www.ecp.ec/tarifas/> [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://www.ecp.ec/tarifas/> [↑](#footnote-ref-6)
7. Agencia Metropolitana de Control, “Informe- AMC-UEC-2022-001.”, página 11. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid., página 15. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ecuador, *Constitución de la República del Ecuador*, Registro Oficial 449, el 20 de octubre de 2008, artículo 18. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ecuador, Código Orgánico Administrativo, artículo 4. [↑](#footnote-ref-10)
11. Erick Olin Wright, “Los puntos de la brújula. Hacia una alternativa socialista”, *New Left Review No. 41*, New Left Review No. 41, 2006, página 91. [↑](#footnote-ref-11)